

DOCTOR

JORGE ENRIQUE MOSQUERA RAMIREZ Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

JUEZ CINCUENTA Y CUATRO (54) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C

PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO.

DEMANDANTE: WILLIAMS QUIJANO GONZALEZ

DEMANDADO: WALTER ALEXANDER GARZON PACHON

RADICACIÓN: 2015– 00526

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN contra el auto de fecha 8 de julio de 2021, notificado por estado el 9 de julio de 2021

JAIRO FERNANDO ACOSTA MORENO mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79517046 de Bogotá D.C. y portador de la tarjeta profesional de abogado N° 99713 del C. S. de la Judicatura, obrando como apoderado del señor WILLIAMS QUIJANO GONZALEZ, persona, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía N° 52.026.560 de Bogotá D.C, ENCONTRANDOME DENTRO DE LA OPORTUNIDAD LEGAL ME PERMITO INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO DE FECHA 8 DE JULIO DE 2021, mediante el cual su despacho dispuso *“RECHAZAR DE PLANO LA SOLICITUD DE NULIDAD PROPUESTA Y SEÑALAR FECHA Y HORA PARA HACER ENTREGA DEL INMUEBLE OBJETO DEL PROCESO al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”*

PETICIÓN

Solicito señor juez, revocar el auto en mención y en su lugar declarar probada la causal de nulidad suprallegal que se presenta con ocasión del presente proceso por violación del derecho fundamental al debido proceso (causal suprallegal) y en consecuencia señalar fecha y hora para que se haga entrega del inmueble objeto del proceso al señor WILLIAMS QUIJANO GONZALEZ.

SUSTENTACIÓN.

Se hace necesario en esta oportunidad, con todo el respeto hacia el honorable señor juez, desvirtuar, varios de los argumentos de la providencia atacada, por no corresponder a la realidad de nuestro ordenamiento jurídico procesal.

- 1. Existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico una causal de nulidad suprallegal, no solamente son las taxativamente señaladas por el artículo 133 del C. G. P, como erradamente se indica en la parte motiva de la providencia censurada**

Varios pronunciamientos jurisprudenciales, así lo ratifican:

“(…) En este caso se configuran las causales de rechazo acabadas de distinguir en razón a que, como se anotó en precedencia, para darle trámite a una nulidad, las inconformidades planteadas deben estar reguladas en el artículo 133 del Estatuto General del Proceso, por ser taxativas, no obstante, una vez revisada la norma con los argumentos esgrimidos por el apelante, no se observa que la condición de haber sido reconocido el ejecutado como víctima del conflicto armado, y haber sufrido de desplazamiento forzado en varias oportunidades y amenazas en su contra, se encuentren establecidas como causal de nulidad.

“Por otro lado, como quiera que el fundamento expuesto por el recurrente frente a la configuración de la nulidad se basa en el derecho fundamental al debido proceso y del derecho de defensa señalado en el artículo 29 del la Constitución Nacional, es preciso decir que dicho articulado hace alusión es a la prueba que se haya obtenido con violación al mencionado derecho, lo cual no es la discusión en el presente asunto, circunstancia que haría más convincente el rechazo de la nulidad, máxime que revisadas las actuaciones se advierte que estas se han adelantado con prevalencia del derecho de defensa y contradicción, tanto así, que la parte pasiva dentro del asunto contestó demanda y presentó excepciones a través de su apoderado judicial, e igualmente ha tenido la oportunidad de mostrar su discrepancia con cada una de las decisiones adoptadas por el despacho (…)”ⁱ Lo subrayado es ajeno al texto.

“Finalmente, en lo que atañe al raciocinio expuesto por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo para solventar la alzada impetrada por los precusores ante la negativa del a quo a declarar la «nulidad supralegal - constitucional» (2 mar. 2020), debe indicarse que no se alcanza a evidenciar desatino alguno en tal determinación.

*En efecto, encontró que las causas alegadas para incoar la «nulidad supralegal no [encajaban] en la causal invalidante prevista en el artículo 29 de la Constitución Política», toda vez que las mismas estaban circunscritas «a repudiar la valoración probatoria realizada por el funcionario judicial al documento aportado para acreditar la calidad de heredero y no, a la existencia de prueba alguna que se hubiera obtenido con violación al debido proceso o transgrediendo prerrogativas ius fundamentales» (fs. 4 a 8 C. 2). (...)”.*ⁱⁱ **Lo subrayado es ajeno al texto.**

Y confrontadas esas impresiones con el escrito de «nulidad» (fs. 181 a 186 C. 1 ibid.), se observa que la inferencia del ad quem no dista de la realidad del expediente y se ajusta, en línea de principio, a las directrices que se desprenden de los artículos 14, 133, 135 y 136 del Código General del Proceso, así como del canon 29 de la Carta Política, precepto superior que proscribe, en forma exclusiva, la incorporación de medios de convicción «obtenidos con violación al debido proceso», en otras palabras, con ostensible e incontrovertible transgresión de atributos esenciales ajenas, que no se avizora en este particular evento, por lo menos no a la luz de los reflexiones y el soporte fáctico propuesto por los quejosos.

*De esta forma, aunque los censores no compartan tal resultado, no resulta plausible avalar en esta sede superlativa el notorio anhelo que les asiste de anteponer su propio criterio y repeler, por esta vía, las providencias que los desfavorecieron, designio ajeno a la vía subsidiaria escogida, cuyo objeto tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los argumentos dados por una entidad jurisdiccional en el ámbito de sus competencias naturales y, como se ha recalcado ”*ⁱⁱⁱ

Reconocidos doctrinantes igualmente ratifican este criterio:

*“Recuérdese, que por disposición constitucional (art 29) “es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” **precepto que sugiere la presencia de una causal supralegal de nulidad...** Así los propuso la Corte Constitucional en las sentencias C-491 d 2 noviembre de 1995 y C-217 del 16 de mayo de 1996, al señalar que el artículo 29 de la Constitución introdujo una causal de nulidad adicional, predicable de todos los procesos, incluso los de naturaleza civil. La circunstancia a sido reproducida en los artículos 14 y 164 del C.G.P.^{iv}. (...)”.*^v **Lo subrayado es ajeno al texto.**

Respetado señor, como existe por reiterados reconocimiento jurisprudencial y soporte doctrinal que existe una causal de nulidad supralegal, como lo es la violación al debido proceso, es procedente su decisión en esta oportunidad con ocasión de este recurso, pues resulta evidente que la previsión del artículo 135 numeral 4 del C.G.P referida en el auto atacado no resulta ser el argumento para un rechazo de plano.

Es decir, acreditado que se invocó una causal de nulidad existente, esta debe resolverse en legal forma, pues el rechazo de plano solo opera cuando se invoca una inexistente, lo que no corresponde a la realidad, conforme lo referido en la jurisprudencias y doctrina señaladas anteriormente.

2. No es cierto, como erradamente se indica en la providencia atacada, que la única oportunidad para invocar las falencias del procedimiento que afectan esta actuación hubiese sido la diligencia del 28 de Enero de 2020.

Respetado señor Juez, dese hace varios años se viene insistiendo que se respete el derecho debido proceso del señor WILLIAMS QUIJANO GONZALEZ, quien obtuvo sentencia favorable, de restitución de inmueble arrendado, pero su despacho de manera inexplicable, además sin invocar fundamento legal alguno, pretende desconocer dicho pronunciamiento que logro el sello de la ejecutoria, el cual hizo tránsito a cosa juzgada material y definitiva.

Me permito en consecuencia hacer una relación cronológica de algunos de los múltiples pedimentos elevados al interior del proceso, para que se cumpla con la sentencia, se respete el derecho fundamental al debido proceso que la actuación y los derechos del actor merece, lo cuales son bastante anteriores a lo actuado en diligencia del 28 de enero de 2020.

* 2 de abril de 2018, solicitud de devolver el despacho comisorio al comisionado

* 22 de Junio de 2018 recurso de reposición contra su auto de abstenerse de continuar con la diligencia de entrega, para que se decidiera la oposición formulada por la señora Aixa carolina rojas moreno y se llevara a cabo la entrega.

*13 de marzo de 2019 recurso de reposición contra la determinación de oficiar al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

*26 de abril de 2019 solicitud que secretaria diera traslado del recurso interpuesto el 13 de marzo de 2019

El 28 de enero de 2020 se inició diligencia, que obtuvo como único resultado que la señora Aixa carolina rojas moreno, renunciara a la oposición que formuló en diligencia de entrega del 23 de noviembre de 2016

3. Improcedencia de entregar un inmueble a quien no formulo oposición dentro de la oportunidad procesal

Conforme nuestro ordenamiento jurídico, **las únicas personas** a la que se les puede hacer entrega de bienes, contrario a lo ordenado en sentencia judicial, es a quien oportunamente se oponga a la entrega y la misma les prospere. Artículo 309 del Código General del Proceso.

Esas condiciones no recaen respecto del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, pues la misma no compareció a la diligencia que se adelantó en su momento por el inspector 8 A Distrital de Policía de Bogotá, allí quien se opuso a la entrega fue la señora Aixa carolina rojas moreno, aduciendo calidad de tenedora, pero la misma antes que se resolviera en derecho su oposición decidió desistir de la misma, lo cual fue aceptado por el despacho en diligencia del 28 de enero de 2020.

Así las cosas, respetado señor Juez, en estricto derecho lo procedente es que se cumpla con la sentencia del 28 de abril de 2016 y se lleve a cabo la entrega del inmueble al señor WILLIAMS QUIJANO GONZALEZ.

De manera reiterada le he indicado, lo que es sabido es por derecho, que en los procesos de restitución de inmueble arrendado no se discute sobre la titularidad del derecho de dominio del bien dado en arrendamiento, luego ese no puede ser el peregrino argumento para desconocer la sentencia y pretender una entrega en favor de una entidad que oportunamente no se opuso a la entrega, proceder en tal sentido, resulta a todas luces ilegal y una evidente y enorme vía de hecho.

Atentamente,



JAIRO FERNANDO ACOSTA MORENO.

C.C. No. 79517046 de Bogotá

T.P. No. 99713 del C. S. de la J.

i Radicación n.º 11001-02-03-000-2020-03018-00 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10468-2020. 25 de Noviembre de 2020.

ii Radicación n.º 11001-02-03-000-2020-03018-00 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10468-2020. 25 de Noviembre de 2020.

iii Radicación n.º 11001-02-03-000-2020-01354-00 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC4532-2020. 17 DE Julio de 2020

iv Lecciones de derecho procesal. Tomo II Procedimiento Civil. Miguel Enrique Rojas Gómez. Quinta edición. Pagina 460.

v Radicación n.º 11001-02-03-000-2020-03018-00 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10468-2020. 25 de Noviembre de 2020.

RECURSO DE REPOSICION

JAIRO FERNANDO ACOSTA MORENO <nandoabogado@hotmail.com>

Mié 14/07/2021 1:59 PM

Para: Juzgado 54 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl54bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (456 KB)

RECURSO 2015 526.pdf;

Señores

JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA

Respetuoso Saludo

Allego recurso de reposición contra el último auto proferido

Atentamente,

Jairo Fernando Acosta Moreno
Apoderado Actor